

JUSTICIA TRANSICIONAL Y ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA:

Una mirada desde la etapa del posacuerdo y las víctimas¹

Nubia Esther Cotrina Romero²
Universidad Católica de Colombia

Resumen

El mecanismo de Transición, utilizado como la reestructuración del territorio colombiano para la etapa de posacuerdo, encuentra sus finalidades en planificar un estado de guerra a uno de paz por medio de un acuerdo político, en este escenario se analizará el contemplado entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (en adelante FARC-EP), que en efecto, desarrolló las políticas que probablemente se podrían utilizar para la reparación integral y del territorio en general. Con lo que no se contaba, era que la falta de atención y seguimiento de este, se vieran afectados todos los lineamientos jurídicos y políticos que se habían acordado, llevando el retroceso del acuerdo final para la paz de los colombianos y dejando en un estado de inseguridad jurídica a los mismos.

Palabras Clave: Posacuerdo, Estado, Violencia, Derechos Humanos, Marco de la Violencia, Acuerdo Final para La Paz.

Abstract

The Transition mechanism, used as the restructuring of the Colombian territory for the post-agreement stage, finds its purposes in planning a state of war to one of peace through a political agreement, in this scenario the one contemplated between the Colombian State and the Revolutionary Armed Forces of Colombia, Army of the People (hereinafter FARC-EP), which in effect developed the policies that could probably be used for the integral repair and of the territory in general. What was not counted, was that the lack of attention and

¹ Artículo de Investigación para optar por el Título de Abogada de la Universidad Católica de Colombia bajo la Dirección de la Dra. Paola Alexandra Sierra Zamora, Docente investigadora, 2019.

² Estudiante de Derecho con asignaturas terminadas, perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, identificada con código estudiantil N° 2109539. Correo electrónico necotrina39@ucatólica.edu.co

follow-up of this, would be affected all the legal and political guidelines that had been agreed, leading to the withdrawal of the final agreement for the peace of Colombians and leaving in a state of legal insecurity to them.

Keywords: Post-agreement, State, Violence, Human Rights, Violence Framework, Final Agreement for Peace.

Sumario: Resumen, Palabras Clave, Abstract, Keywords, Introducción, 1. Etimología Y Generalidades Del Término Posconflicto, 2. Posconflicto En Colombia, Un Análisis Al Acuerdo Final Para La Paz, 3. Investigación Doctrinal Y Jurisprudencial Crítica Del Posconflicto En Colombia, Conclusión, Referencias Bibliográficas.



La presente obra está bajo una licencia:
Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)
Para leer el texto completo de la licencia, visita:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Introducción

Colombia lleva muchísimos años en guerra y posee una mala experiencia en procesos de paz frustrados. Desde las guerras de la independencia, pasando por la guerra de los Mil Días y la Violencia, hasta el actual proceso de paz firmado entre el gobierno nacional de Colombia y las FARC-EP³.

Durante más de cincuenta años, la sociedad colombiana ha soportado un brutal conflicto civil que involucra a una miríada de actores, es decir, Gobierno, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC-EP), Milicias de Autodefensa Unidas de Colombia-AUC), Ejército de Liberación Nacional -ELN). Este conflicto de larga duración ha roto notoriamente los tejidos sociales, económicos y políticos en Colombia y ha dejado al país en una ola constante de violencia (Gonzalez, López & Ávila, 2018).

Esto ha dejado en evidencia, que Colombia necesitaba un Acuerdo de Paz que lograría esa paz estable y duradera, un acuerdo político con unas características únicas que lograra en toda medida reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado interno y poder soslayar un periodo de Justicia Transicional evolucionativo y diferente a todos los demás, pues esta vez, se firmó un acuerdo de paz entre una de las guerrillas más violentas de Colombia, las FARC-EP y el Estado colombiano el 24 de noviembre de 2016⁴.

Pues bien, la construcción de una paz estable y duradera se establece por medio de las formas y condiciones políticas de reparación para las víctimas, las cuales han sido una utopía para el Estado colombiano, pues aunque quedaron enganchadas en el Acuerdo de Paz, éstas no se cumplen y nunca se cumplieron.

³ Si lo que se quiere es ampliar, véase: Forero, J. F. G. (2005). Colombia in armed conflict? 1946-1985. *Papel Político*, (18), 43-78.

⁴ Si lo que se quiere es profundizar en el acuerdo de paz, vease: Zambrano, L., & Isa, F. G. (2013). Participation of civil society in the Colombian peace process. *NOREF: Norwegian Peacebuilding Resource Centre*.

De este modo, el presente artículo pretende desarrollar la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál ha sido el impacto de la Justicia Transicional y el Acuerdo de Paz en Colombia?

Para desarrollar el presente artículo se utilizará la metodología de investigación exploratoria, descriptiva y propositiva que desarrolla Agudelo-Giraldo, et al. (2018, pp. 45-67). De esta forma, se tendrán tres ejes temáticos a desarrollar. En el primer eje, se pretende dar a conocer desde una perspectiva doctrinal el significado del término posacuerdo y fijar una conceptualización para implementar su verdadera funcionalidad y no confundir con el término posconflicto. En el segundo eje, se analizará la figura de la Justicia Transicional y cómo es su repercusión en el acuerdo de paz. En un tercer eje, se analizará el acuerdo final para la paz, y en específico lo concerniente a las víctimas, sus derechos y lineamientos jurídicos en tiempos de posacuerdo. Para finalizar, unas breves conclusiones.

1. Etimología y Generalidades del término Posconflicto

Se iniciará este recorrido, definiendo el término posconflicto y basándonos en la doctrina que abarca esta área para determinar la imposibilidad del mismo y se centrará en una conceptualización mucho más efectiva, esta es, el posacuerdo dentro de la etapa de Justicia Transicional que se adelanta en Colombia. Se da inicio al primer eje temático.

De este modo, se logra entender, que tanto la superación total de los diferentes conflictos que renacen de manera natural dentro de un territorio en específico, generando víctimas y afectados (Sierra, 2018) no podrá verse como una etapa de posconflicto sino como posacuerdo, porque para la segunda modalidad, la implicación de terminación total del conflicto no es su estándar final, lo que si sucede con la primera. Aquí, ya puede demostrarse que el término tiene una modalidad confusa, y que en el Acuerdo de paz esa modalidad se ve repercutida al no usar de manera adecuada la connotación misma. Todo, para decir, que posconflicto en palabras de Molano-Rojas es:

(...) reflexión y propuesta para recorrer la transición (...), es un esfuerzo por esbozar algunas líneas de acción y recomendaciones en torno a lo que podría ser la vía

hacia una fase de posacuerdo, entendido como un proceso más que como un resultado (2015, pp. 11-13).

En este orden de ideas, se debe tener en cuenta que un acuerdo de paz consiste en el pacto legal que debe hacer el gobierno con un grupo armado ilegal para el cuidado, protección y sincronización de los derechos humanos y fundamentales inherentes de cada persona, garantizando uno de los principios más importantes de la Constitución Política de Colombia contemplado en el artículo 2⁵, el cual establece promover la prosperidad de la población colombiana, además en conexidad con el Artículo 22⁶, el cual obliga al Estado colombiano a ejercer acciones para mantener la soberanía y que la guerra no vuelva a repetirse. Aquí por ejemplo, se sienta el primer debate sobre el concepto, pues al tener la guerra no volver a repetirse los estándares constitucionales a los que está ligados hacen que el conflicto termine, en Colombia, por el contrario, el conflicto no había acabado.

Teniendo en cuenta lo anterior, y desde la terminología de conflicto Montilla, Gonzales y Bermejo lo definen como:

El conflicto debe ser entendido frente a diferentes causas de carácter económico político, social, religioso o cultural, entre otras: favoreciendo en esta medida la configuración de espacios de oposición en los que se presentan diferentes alternativas para asumir y dirimir la controversia entre los grupos de presión que en mayor o menor medida se organizan en medio de la divergencia social (2018, pp. 31- 46).

⁵ Encuentre más en: Colombia, Constitución política. (1991). 2da Ed. Legis. Artículo 2: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

⁶ Lea más en: Colombia, Constitución política (1991). 2da Ed. Legis. Artículo 22: La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Y es de esta misma manera, que el efecto principal de la firma del Acuerdo Final es el compromiso de cumplir lo pactado, de ahí la importancia de hablar del término posacuerdo, como se analizó en párrafos anteriores.

Concretando, dar una definición exacta sobre el término de posconflicto resulta muy complejo, ya que el termino rodea distintos puntos, sin embargo, se puede llegar afirmar que posconflicto reúne un periodo de tiempo por el cual dos partes están enfrentadas, es decir un Estado y un grupo al margen la ley para este caso, y que aún pactando el cese el fuego entre las partes, este continúe. También, tratándose de posacuerdo se puede llegar a entender por dos términos: regeneración y rehabilitación⁷, pues lo que resulta de la firma de un acuerdo de paz es precisamente eso. Así, la etapa después de vivido el conflicto armado interno entre un Estado y un grupo armado ilegal tras la firma de un acuerdo de paz, se llama posacuerdo (Sierra, 2018).

Para finalizar, se entiende por posconflicto, además, a las acciones y estrategias planteadas en el acuerdo final para la paz que actualmente no se han logrado, y al consenso para llevarlas a cabo, pues la implementación de estas operan con el fin de sentar las bases de una estructura social que logre en buena medida finalizar con los grupos al margen de la ley con el fin de eliminar los conflictos armados y lograr crear espacios adecuados para el desarrollo de la población colombiana, mediante la construcción de paz, construcción que no se ha logrado.

2. Justicia Transicional en Colombia: reconceptualización

En el tema de los conflictos armados internos, y más tratándose del caso colombiano, debe hacerse una diferenciación de jurisdicciones según la causalidad de los delitos. Lo que implica someter a posibilidad tanto la utilidad de una Justicia Penal Militar (JusPM), como la razón de sus áreas de competencia (Cubides, Sierra & Núñez: 2017, p. 66), teniendo en cuenta las circunstancias previstas en la Ley (Mejía & Marín: 2015, p. 71). Es así, como las

⁷ Lea más información en: Ospina, F. A. R. (2016). Reflexiones sobre el posconflicto: Aprendizaje de la historia. Revista Ensayos Pedagógicos, 11 (1), pp. 41-55.

víctimas encajan dentro de unos elementos constitutivos de la Justicia Transicional (en adelante JT).

Así lo señala Teitel, R. (2003):

“La Justicia Transicional puede ser definida como la concepción de justicia asociada con períodos de cambio político, caracterizados por respuestas legales que tiene el objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regímenes represores anteriores” (pp. 69 - 44).

O, como lo indica Angélica Rettberg (2005):

(...) La Justicia Transicional es uno de los temas de mayor relevancia para la construcción de la paz, definida como el tipo de arreglos judiciales y extrajudiciales que facilitan y permiten la transición de un régimen autoritario a una democracia o de una situación de guerra a una de paz (p. 1).

En palabras de Cubides-Cárdenas, Sierra-Zamora & Mejía (2018) la Justicia Transicional en Colombia implica una necesidad de alcanzar la efectividad del derecho a la paz en escenarios de posacuerdo dentro del tránsito de un periodo de violencia a otro de fortalecimiento de la paz. Aunque, se sabe que con el fin de un conflicto armado no llega la paz como consecuencia inmediata de los acuerdos con grupos insurgentes tras periodos de violencia (Monroy, 2013, p. 1) y eso implica la necesidad de seguir llamando posacuerdo y no posconflicto como se hace erradamente.

Por consiguiente, la JT pretende garantizar los derechos de las víctimas conciliando y sopesando sus demandas de justicia, verdad y reparación, pero además, la adopción de reformas institucionales y otras garantías de no repetición, con la necesidad de lograr acuerdos que permiten alcanzar la paz y el establecimiento de la democracia (Ibáñez Najar, 2017, p. 68). Así se estableció en el SIVJNRN creado por el Acuerdo de Paz.

Dentro del desarrollo constitucional que viene experimentado Colombia, a raíz del propósito político, jurídico e institucional para superar el conflicto armado que ha aquejado el país por más de 60 años, se puede entender que ha tenido avances significativos en el ámbito legislativo interno -avalados por la Corte Constitucional-, reflejados en el Acuerdo

Final de Paz, lo que hace que la conceptualización evolucione a medida que se van creando esas nuevas formas dinámicas dentro de los procesos de paz, un ejemplo claro de ello es la JT transformadora y renovadora del Acuerdo de Paz, por tanto, la justicia transicional es una formula usada en un marco democrático para tramitar la solución de un conflicto armado (Gamboa, 2005, p. 21).

Un ejemplo de ellos, puede verse reflejado por la Corte Constitucional en Sentencia C – 370 de (2006), así:

(...) la Ley 975 de 2005, no es una ley para tiempos de normalidad, se caracteriza por utilizar mecanismos de justicia transicional con miras a la consecución de la paz. Señala como fin de la ley demandada, así como de otras leyes similares, la búsqueda de diferentes mecanismos tendientes a la solución del conflicto armado.

Y en ese mismo sentido, lo reitera la Corte Constitucional en Sentencia C – 694 de (2015):

(...) La Justicia Transicional implica la articulación de un conjunto de medidas judiciales, o extrajudiciales, y puede abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todas las anteriores, tal como lo ha reconocido el Consejo de Seguridad.

Y todo esto para lograr entender y articular de alguna manera la trayectoria jurisprudencial que los mecanismos en la Justicia Transicional integran, en buena medida, los requerimientos multiactivos que emanan de la implementación de la misma (Cubides-Cárdenas, Sierra-Zamora & Mejía, 2018, p. 19).

Y, siguiendo a Ibáñez Najar (2017) esos mecanismos son:

(...) Los juicios -mecanismos judiciales-, las comisiones de verdad, los proyectos de construcción de memoria histórica -momentos no judiciales-, y las amnistías, purgas administrativas, reformas institucionales y reparaciones -mecanismos administrativos-, sin perjuicio de otros mecanismos relacionados con la justicia aplicada en procesos de transición

política y social. Todos estos mecanismos tienen como fin el establecimiento de la paz y la democracia y la efectividad de los derechos de las víctimas (p. 603).

De este modo, el posacuerdo sería, en buena medida, una etapa de construcción de un nuevo Estado, en el cual se dejen atrás los horrores del conflicto y se solventen los problemas que han originado y prolongado el conflicto colombiano (Calderón Rojas: 2016).

Con estos antecedentes, desde la perspectiva de la Reparación Integral en un escenario de JT, se debe precisar que para la materialización de una verdadera paz en el territorio es necesario otorgar a las víctimas de este conflicto un papel fundamental dentro de los procesos encaminados hacia ese fin (Cubides-Cárdenas, Sierra-Zamora & Mejía, 2018, p. 17).

Por consiguiente, lo que logra la JT es pretender la garantía de los derechos de las víctimas conciliando y sopesando sus demandas de justicia, verdad y reparación y la adopción de reformas institucionales y otras garantías de no repetición, con la necesidad de lograr acuerdos que permiten alcanzar la paz y el establecimiento de la democracia (Ibáñez Najar: 2017, p. 68).

3. El Acuerdo Final en Colombia: panorama general

Aquí se dará inicio al tercer eje temático, concerniente al estudio sobre el Acuerdo Final para la terminación del Conflicto Armado que se firmó el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá y que trae como resultado un escenario político-jurídico frente a la historia del conflicto armado en Colombia.

Se puede observar, que el cese bilateral nunca se dio y que el conflicto continua, puede denotarse la reciente publicación del manifiesto que realizaron los altos mandos de las FARC-EP⁸, donde quebranta en toda medida las condiciones jurídicas y políticas establecidas en el Acuerdo de Paz que firmaron. Pero más allá todas las cuestiones, al poder analizar detenidamente este tipo de discurso en cabeza de Iván Márquez, puede analizarse un discurso político con fines geopolíticos relevantes y geoestratégicos impactantes para la

⁸ Para más información, véase: <https://www.youtube.com/watch?v=kRb3fi5Zg3c>

Defensa y Seguridad del Estado colombiano, pero que no se analizará en el presente, por no ser su objeto de estudio principal.

En el panorama general, el Acuerdo de Paz crea el llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (en adelante SIVJRGR). Para ello, el Estado colombiano cumple con la función de la firma del acuerdo final para la paz con el propósito de finalizar un conflicto armado de mas de 50 años en el territorio colombiano y garantizar a sus víctimas un proceso de transición justo y eficiente. Además, el SIVJRGR tiene como finalidad consolidar un escenario institucional transitorio o temporal suficiente y apropiado para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado y contribuir en la reconciliación nacional.

Con el fin de consolidar el acuerdo de paz en Colombia, y cumpliendo el papel que sienten unas bases sólidas para la transformación de la paz y el fortalecimiento en la participación de todos los colombianos en la construcción de paz, se vinculan nuevas experiencias laborales, haciéndolos partícipes de la política, de los asuntos públicos, brindándoles seguridad y confianza dentro del Acuerdo de Paz (Cubides-Cárdenas, Sierra-Zamora, et al., 2019, pp. 309-325), asunto que no resultó del todo bien, por los recientes acontecimientos del manifiesto que hizo el señor Iván Márquez como se anunció con anterioridad.

Pero más allá de la regeneración política que se vive hoy por hoy en Colombia, será el aspecto físico de la guerra el que en este momento está marcando la diferencia, es decir, después del 24 de noviembre de 2016 inicia el recorrido de implementación del Acuerdo de Paz con la firma, pero el 29 de agosto de 2019 se rompen todos esos esquemas firmados en el 2016 al anunciar (las FARC-EP) el renacimiento de la nueva marquetalia o marquetalia 2.0. Acontecimiento que, como ya se dijo, afecta de sobremanera la Defensa y Seguridad Nacional al ser una amenaza política real.

Es de tener en cuenta, que frente a las víctimas que se encuentran relacionadas con este conflicto armado interno en Colombia, se encuentra, que el más vulnerable es el pueblo campesino (Rueda, 2008, pp. 345-359). La rehabilitación será por lo tanto, como el conjunto

de medidas sociales, políticas, culturales o jurídicas destinadas a restituir al sujeto (Sierra & Cubides, 2018).

Del mismo modo, y refiriéndose a la contrariedad que existe sobre la victimización que existe todavía en Colombia, Gatti (2011) asegura que:

(...) la víctima es aquella persona o grupo que se encuentra en el medio o en torno a ella un conflicto armado, la cual es afectada directamente, física, social, económica y políticamente dentro de un campo social sufriendo daños, lesione física o psicológicas, mentales, sufrimiento emocional por la pérdida de sus familiares o financieras, el menoscabo sustancial de los derechos fundamentales (pp. 519-536).

Así lo establece el Acuerdo Final para la Paz (2016):

Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y ROM, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia (2016, pp. 6-10).

Se entiende que el conflicto armado ha dejado diversas víctimas, además de la destrucción del campo colombiano siendo uno de los recursos naturales más importantes para Colombia, ninguna parte del país ha escapado de las consecuencias del conflicto, desde las comunidades indígenas aniquiladas por el conflicto armado, familias afrodescendientes y campesinos expulsados de sus hogares, de mujeres violadas, niños y niñas huérfanos, innumerables derechos humanos y fundamentales violados.

El acuerdo final para la paz⁹ es una oportunidad histórica que supone erradicar las violentas situaciones que fueron causa y consecuencia de la confrontación armada durante

⁹ Como bien lo estipula la Corte Constitucional en la Sentencia C-470/2017: La interpretación coherente e integral de los acuerdos y de las medidas que lo desarrollan, permite trascender a una visión holística, en el que los diferentes elementos del proceso de justicia transicional deben ser analizados como partes inescindibles de

décadas. Dentro de los seis (6) puntos del Acuerdo final para la paz, donde se estipulan las referencias directas a la garantía y el respeto de los derechos humanos, con un enfoque transversal que debe guiar su implementación. Además, el Estado colombiano tiene el compromiso con el respeto y la garantía de los derechos humanos, se definen mandatos concretos para el respeto y la garantía de estos, como el mejor camino hacia la no repetición de las vulneraciones¹⁰.

Como bien esta estipulado en el punto uno (1):

Reforma Rural Integral”, que contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. La “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía.

Teniendo en cuenta lo anterior, el punto sobre reforma rural integral, que reconoce los territorios afectados por el conflicto y la necesidad de transformación de la ruralidad y de su aporte en la construcción de la paz, se contempla la creación de un fondo de tierras para campesinos que no dispongan de tierra suficiente y la formalización de la propiedad para aquellos que sí la tienen, pero no cuentan con escrituras (García, 2015).

También estipulado en el punto dos (2):

Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. La construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales

un todo, interdependientes y ligados al mismo fin, de tal manera que se deje de lado el análisis aislado y fragmentario que solo puede tener como resultado la distorsión del proceso. Por todo lo anterior la Corporación decidió declarar exequible el decreto bajo examen.

¹⁰ Encuentre más información en: Sierra-Zamora, P. A., Cubides-Cárdenas, J., & Carrasco Soulé, H. (2016). El control de convencionalidad: aspectos generales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el derecho colombiano. Cubides-Cárdenas, J., Cárdenas-Contreras, LE, Carrasco Soulé, H., Castro Buitrago, CE, Chacón Triana, NM, Martínez Lazcano, AJ, Pinilla Malagón, JE, Reyes García, DI, Sánchez Baquero, MN & Sierra-Zamora, PA (2016). El control de convencionalidad: fundamentación e implementación desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política.

En el punto segundo, relativo al pluralismo y la ampliación de la democracia, reconoce el rol fundamental del derecho de participación política de las víctimas¹¹, entendida como la posibilidad de elegir y ser elegido, así como el respeto a la oposición, para construir una democracia sólida. Pero también, al contar con diversas voces, alienta el derecho a la libertad de expresión y al derecho a la información a través de medios de comunicación de tipo comunitario, institucional y regional, que beneficiarán tanto a las organizaciones y movimientos sociales como a la ciudadanía en general.

Sin embargo, Colombia un país de diversidad cultural, especialmente los que viven fuera de las grandes ciudades y en las zonas rurales, siguen siendo los más castigados por este conflicto violento y prolongado (Valencia, 2010, pp. 429-439). Pero realmente estos son silenciados de manera abrupta, en gran medida el campo colombiano es manejado por el narcotráfico y el cultivo de drogas ilícitas (Meza, 2004, pp. 117-131), a raíz de esta problemática se encuentran los cientos de miles de personas que cada año son víctimas de desplazamiento forzado (Escobar, 2004, pp. 53-72); los cientos de personas y niños secuestrados por los grupos guerrilleros cada año; las víctimas de desapariciones forzadas a manos de los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad; a pesar de la firma del Acuerdo

¹¹ Se entiende que la participación política por parte de los ciudadanos es de carácter obligatorio con el fin de cumplir el derecho fundamental. Colombia, Constitución Política (1991). Artículo 265. El Consejo Nacional Electoral tendrá, de conformidad con la ley, las siguientes atribuciones especiales: 1. Ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral. 2. Elegir y remover al Registrador Nacional del Estado Civil. 3. Conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales y en tales casos hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales correspondientes. 4. Servir de cuerpo consultivo del Gobierno en materias de su competencia, presentar proyectos de acto legislativo y de ley, y recomendar proyectos de decreto. 5. Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías. 6. Distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas electorales y para asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos, establezca la ley. 7. Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar. 8. Reconocer la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos. 9. Reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado. 10. Colaborar para la realización de consultas internas de los partidos y movimientos para la escogencia de sus candidatos. 11. Darse su propio reglamento.

Final para la paz, no han disminuido las cifras crecientes de personas ejecutados extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad; los menores, algunos de ellos de tan sólo 12 años, reclutados por los grupos paramilitares y la guerrilla; las personas muertas o mutiladas por las minas terrestres antipersonal de las guerrillas; las mujeres violadas por todas las partes en el conflicto (Ramírez, 2009); los defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas sociales y dirigentes comunitarios amenazados y muertos, principalmente a manos de los paramilitares; y las víctimas de los ataques con bomba en las áreas urbanas, muchos de los cuales se han atribuido a las FARC-EP (Camacho & Rico, 2016, pp. 193-213).

Además, dentro del proceso de paz o de desmovilización, la búsqueda de la verdad (Valencia, 2007, p. 41) y la justicia, se entrañan dificultades significativas, como las que se mencionaron anteriormente. Pero para que ese proceso obtenga un éxito real y no un éxito superficial a corto plazo, debe incluirse a la víctima en el centro de todo el proceso.

Del mismo modo, el gobierno colombiano ha afirmado por medio de los medios de comunicación amarillistas que los grupos paramilitares ya no están activos (Bello, 2009, pp. 163- 177), y que toda la violencia que se produzca debe atribuirse a las bandas criminales implicadas en el narcotráfico. Pero son cuestionamientos irreales, puesto que la realidad colombiana siempre fue otra, lo que supone nuevamente a que se haga referencia a una etapa de posacuerdo y no de posconflicto, como se analizó en el primer eje temático.

De esta manera, y teniendo en cuenta lo dicho por el manifiesto de las FARC-EP, el Acuerdo de Paz fue la puerta principal para que las FARC-EP pudieran tener acceso a alineaciones estratégicas políticas y jurídicas, pero además, a “ganar tiempo” para su reorganización. No era la finalidad del Acuerdo de Paz, se violentaron todos los estándares fijados en el, y ahora lo que debe preguntarse y lo que debe preocupar al gobierno son: las víctimas.

4. Las víctimas: efectos y consecuencias del Conflicto Armado Interno

Aunado todo lo anterior, el impacto del conflicto armado en Colombia como se ha podido evidenciar, ha dejado en los últimos años una marca en cada una de las víctimas que sufrieron esta guerra, además, resultados que muestran que en la cotidianidad sobre el

posacuerdo se ha tenido repercusiones devastadoras para el desarrollo social del país. En este apartado se pretende desarrollar el tercer y último eje temático.

Dentro de la gran problemática de la lucha contra el conflicto armado interno, el cual ha afectado a la sociedad rural colombiana, se ha podido estudiar, que este tipo de comunidad es la más vulnerable, violándoseles derechos humanos y sometidos a diversidad de agresiones tales como:

- Homicidio: este acto ilícito se define como aquel acto de matar a una persona humana con dolo. Dentro de la legislación penal se considera un delito el cual consiste en una acción u omisión contra el bien jurídico de la vida de una persona física, ya sea con o sin intención. Es una conducta reprochable, jurídicamente tipificable y por regla general culpable, con excepciones como en casos de inimputabilidad, o sea no culpable pero sí penalmente responsable, por la violación del derecho fundamental de vida el cual se estipula dentro de la Constitución Política de Colombia (Restrepo, 1996, p. 736).

- Tortura: se considera todo acto ilícito por el cual se inflige con dolo o sin dolo a una persona, produciéndole dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia (Villán, 1985, p. 377).

- Tratos Crueles e Inhumanos: dentro de la jurisprudencia internacional se entiende que ningún ser humano debe estar sometido a los actos crueles e inhumanos por lo cual se entiende que son actos que agreden o maltratan intencionalmente a una persona. Estas acciones buscan castigar o quebrantar la resistencia física o emocional de una persona (Zapatero, 2013, pp. 5-26).

Partiendo de lo anterior, se entra a analizar la reparación a las víctimas de conflicto armado interno, puesto que son ellas las principales actoras del Acuerdo de Paz, porque es un acuerdo de las víctimas y para las víctimas.

Nuevamente, y para centrar la idea, se parte de que el Acuerdo de Paz creó el SIVJRGNR para compensar a las víctimas del conflicto armado en los términos fijados en el mismo acuerdo, pero cabe decir, que la reparación a las víctimas implica mucho más que una mera compensación económica; para que sea efectiva, tiene que ser también integral. Con esto, lo que se quiere decir, es que el objetivo debe ser restituir a la víctima, en la mayor medida posible, las condiciones de que disfrutaba antes de la violación de sus derechos e incluir ayuda legal y psicosocial, permitir el acceso a la verdad y a la justicia y garantizar que la violación o el maltrato no se volviera a repetir.

En este orden de ideas, se entiende por reparación, no solo la indemnización económica de las víctimas sino que debe apuntar fundamentalmente a la reconstrucción y reivindicación de sus derechos, el restablecimiento de la verdad, el retorno al lugar de origen y la restauración de sus empleos y propiedades, entre otros aspectos. También, el desarrollo en los aspectos personales, familiares y sociales, estableciendo el acompañamiento económico jurídico, social y psicológico, incluso a sus allegados en los términos que establece la ley colombiana y el Acuerdo de Paz.

Por otro lado, las medidas de reparación y restitución¹² se comprenden por medio de la indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Con lo cual, las víctimas podrían gozar del acceso a un número plural de garantías jurídico-constitucionales que el Estado colombiano estaría dispuesto a soportar.

A manera general, el SIVJRGNR es un sistema compuesto por diferentes mecanismos judiciales y extra judiciales (como ya se tuvo la oportunidad de analizarse en apartados anteriores) que se pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en el, y contribuir a garantizar la convivencia, la reconciliación y la no repetición de las acciones del conflicto y así, asegurar la transición del conflicto armado a la paz (Alto Comisionado), logrando el propósito general

¹² Encuentre más información en: López, J. I. A., & Rubio, D. B. (2008). El cumplimiento de los fines de reparación integral de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: énfasis en la experiencia colombiana. *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, 6 (13).

del Acuerdo de Paz, el reconocimiento a las víctimas, a sus derechos, a sus garantías y a los actos de no repetición.

En adelante, se analizarán los componentes del SIVJRGNR por separado para entender la dinámica de cada uno, y lograr articular con la idea central del texto que será el impacto de la JT en los estamentos del Acuerdo de Paz.

4.1 Restitución y Rehabilitación en el SIVJRGNR

Como primera medida, la restitución busca volver a la situación original antes de la violación. Es decir, no excluye las otras formas de reparación como la indemnización. La rehabilitación, por el contrario, busca evitar el deterioro en la situación de las víctimas y otorgarles apoyo psicológico y físico para que puedan volver a insertarse en su familia, comunidad y sociedad (González, 2010, pp. 629-658).

4.2 Garantías de no repetición

Las Garantías de No Repetición son consideradas tanto una de las formas de reparación a las víctimas como uno de los principios generales de responsabilidad internacional de los Estados. Dichas garantías a diferencia de las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción se encuentran dirigidas a la sociedad con el propósito que no se repitan la vulneración de los derechos de las víctimas, así como eliminar y superar las causas estructurales de la violación masiva a los derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario al interior de la sociedad. Las garantías de no repetición comprenden dos dimensiones: una preventiva y otra reparadora (Unidad de Víctimas).

4.3 Reparaciones “stricto sensu”

Estas son el tipo de reparaciones que persiguen la plena restitución del derecho (Loianno, 2007, pp. 389-413). Reparaciones sustitutivas del daño material y moral: Este tipo de reparaciones se encuentra con el difícil problema de la determinación precisa del daño, tanto material pero incluso mucho más problemático, el “moral”, vinculado con aspectos “extrapatrimoniales”. No existen, por tanto, criterios claros y definidos de cuantificación de

este tipo de daño y por tanto la teologal, tal como suele suceder también en los ordenamientos nacionales, es variada y cambiante (Douzinas & Becerra, 2010, pp. 219-229).

Ahora bien, analizado lo anterior, las reparaciones pueden estar dirigidas tanto a personas individuales como a colectivos, tales como comunidades, grupos o regiones, siempre que sean víctimas del conflicto, teniendo el Estado, la obligación de entregar beneficios (administrativos¹³, pecuniarios o no pecuniarios como se anoto con anterioridad) con el fin de lograr una reparación efectiva a los individuos, acentuando el valor de cada ser humano y su condición de titular de derechos.

Además, el derecho a la reparación (teniendo en cuenta todo su marco normativo), se encamina en acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y las garantías de no repetición de las conductas. Entendiéndose esta, como la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito, pero también, a la indemnización (teniendo en cuenta sus dimensiones) (Fernández, 2004, pp. 99-124).

En este orden de ideas, la reparación en su dimensión integral debe estar vinculada estrechamente con los derechos a la verdad, justicia y garantías de no repetición, no sólo intentar aliviar el sufrimiento de las personas y comunidades afectadas, superando algunas de las peores consecuencias de la violación a los derechos humanos sino aunando los esfuerzos porque las garantías de no repetición sean materializadas por parte del Estado colombiano. La búsqueda de la reparación integral supone, entonces, la democratización de la sociedad y sus instituciones, y la adopción de medidas preventivas para que no vuelvan a repetirse jamás hechos que provoquen la muerte y la destrucción (Mejía, 2013, pp. 29-39).

Conclusiones

Iniciamos este acápite dando respuesta concreta a la pregunta de investigación inicialmente planteada, pues se pudo observar que a lo largo de la investigación el impacto

¹³ Se entiende por reparación integral administrativa, al conjunto de medidas de reparación que el Estado reconozca, de manera individual, a las víctimas de violaciones de sus derechos humanos y derecho internacional humanitario, por hechos atribuibles a los grupos armados ilegales (Roberto, Alexandra & González, 2011).

no ha sido ni tan malo ni tan bueno. En el primero, porque en la medida de lo posible el Estado colombiano ha incentivado todas sus prácticas a coordinar la esfera del acuerdo de paz, importando las víctimas. Pero tampoco tan bueno, porque verdaderamente las FARC-EP “se salieron con las suyas”, quedando en desprotección las víctimas, y violandose todas las garantías constitucionales y supranacionales que contrae el acuerdo de paz mismo.

Es de tener en cuenta, a modo aclarativo, que los procesos de paz en Colombia no son un evento nuevo, su inicio parte prácticamente desde la independencia donde se han presentado insurrecciones en contra de los gobiernos que han terminado en masacres admitidas y procesos de justicia transicional¹⁴, y no es que se deba sentir en total plenitud con lo que se ha logrado, pero es de tener en cuenta, que existe materialmente un acuerdo de paz, que quedaron estipuladas unas condiciones y garantías constitucionales y supraconstitucionales y que tiene plena validez jurídica nacional e internacionalmente hablando.

En este sentido, se logra entender que dentro de las problemáticas surgientes después del acuerdo de paz (etapa de posacuerdo), se entiende que no se ha logrado evidenciar en un cien por ciento todos los puntos establecidos dentro del acuerdo (Sierra-Zamora, et al, 2018, pp. 340-360), teniendo en cuenta, que en la actualidad aún se encuentran problemáticas de violencia con relación a lo que se menciona a lo largo del artículo, evidenciando así, que los índices de violencia a todas las personas aún siguen en crecimiento, las reparaciones no se llevan con total plenitud y las víctimas, luchando por lo que les corresponde.

Es pertinente tener en cuenta, que los acuerdos de paz, son simplemente papeles que se firman, el hecho de que se firme no garantiza en total plenitud el goce efectivo de pasar a un estado de paz absoluta. El verdadero reto de la sociedad colombiana es institucionalizarlos, pero sobre todo, construir una cultura de paz que a través de la cooperación social se permita llegar a la paz.

¹⁴ Lea más en: Cubides-Cárdenas, J., Sierra-Zamora, P. A., & Azuero, J. C. (2018). Reflexiones en torno a la Justicia Transicional en Colombia: Fuerzas Armadas, Víctimas y posacuerdo. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 23 (2), pp. 11-24.

Este es el escenario ideal, quizás utópico, en donde los colombianos del futuro puedan vivir en un país distinto, en donde los retos que contiene la JT se materialicen y se lleve a cabo esa lucha por la paz.

Para concretar, dentro de la etapa de posacuerdo, se logra entender que el cambio dentro de la población rural no se ha efectuado del todo ya que, dentro de las tierras de los campesinos se sigue cultivando ilícitamente drogas, la mayoría de la población no ha recibido el retorno de sus familiares o niños niñas y adolescentes, y ni se le ha cumplido el derecho de tener una vida digna a las víctimas, no solo por insatisfacción del Estado sino por seguridad personal teniendo en cuenta los acontecimientos que aún se viven en las zonas más rotundas de Colombia.

En este entendido, y para finalizar, tanto al acuerdo de paz como a la sociedad colombiana en general, el funcionamiento del mismo y las garantías existentes, hace que sea de vital continuidad para lograr el mantenimiento de la paz, se sabe que es un proceso largo y tedioso, que requiere muchos sacrificios, pero manteniendo la esperanza de que la paz va a llegar.

Bibliografía

Doctrina

Agudelo-Giraldo, Ó. A., León Molina, J. E., Prieto Salas, M. A., Alarcón-Peña, A., & Jiménez-Triana, J. C. (2018). La pregunta por el método: derecho y metodología de la investigación. Universidad Católica de Colombia, núm. 5, pp. 45-67.

Bello Montes, C. (2009). Posconflicto en Colombia: un análisis del homicidio después del proceso de desmovilización de los grupos de autodefensa. *Revista criminalidad*, 51 (1), pp.163-177.

Calderón Rojas, J. (2016): Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el posconflicto. *Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos*, (62), pp. 227-257. <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis491.pdf>

Camacho, M. A. M., & Rico, M. E. D. (2016). Posturas en la atención psicosocial a víctimas del conflicto armado en Colombia. *El ágora USB*, 16 (1), pp. 193-213.

Cubides-Cárdenas, J & Sierra-Zamora, P. (2018). Reparación Integral De Las Víctimas En La Justicia Transicional: Historia, Debate Y Actualidad Dentro Del Acuerdo De Paz Firmado Por El Gobierno De Colombia Y Las FARC-EP. En: Velandia Canosa, E. A. (2018). *Derecho Procesal Constitucional*. Bogotá: Legis. pp. 631-644.

Cubides-Cárdenas, J. A., Sierra-Zamora, P. A., Ortiz, D. A. C., & Caballero, N. P. (2019). Terrorism by the FARC-EP and public policies oriented towards national security in Colombia during 1990-2000. *Revista Científica General José María Córdova*, 17(26), pp. 309-325.

Cubides-Cárdenas, J., Sierra-Zamora, P. A., & Núñez, M. D. (2017). El fuero militar en el derecho colombiano vs. El derecho ecuatoriano. En: Cubides-Cárdenas, J. (2017). *El fuero militar: Justicia Interamericana y Operaciones para el Mantenimiento de la Paz*. 1ª. Ed. Bogotá: Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova, Colombia, pp.1-149.

Douzinas, C., & Becerra, M. C. E. (2010). La reparación a las víctimas del conflicto en Colombia. *Diálogos de saberes*, (33), pp. 219-229.

Escobar, A. (2004). Desplazamientos, desarrollo y modernidad en el Pacífico colombiano. Conflicto e (in) visibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia, pp. 53-72.

Fernández Sessarego, C. (2004). Recientes decisiones de los tribunales internacionales de derechos humanos: La reparación del "daño al proyecto de vida" en la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos. *Anuario de Derecho Europeo*, 4, pp. 99-124.

Forero, J. F. G. (2005). Colombia in armed conflict? 1946-1985. *Papel Político*, (18), 43-78.

Gamboa, C. (2005) Justicia transicional: dilemas y remedios para lidiar con el pasado. *Estud. Socio-Juríd.*, Bogotá (Colombia), 7 (Número especial): 21-40, agosto de 2005. Universidad del Rosario.

García, J. (2015). Cooperación Internacional y posconflicto en Colombia: más allá de los recursos económicos. *Horizontes*. Universidad de los Andes. Bogotá DC

Gatti, G. (2011). De un continente al otro: el desaparecido transnacional, la cultura humanitaria y las víctimas totales en tiempos de guerra global. *Política y sociedad*, 48 (3), pp. 519-536.

Gonzalez, A. J., López, M. P., & Ávila, A. M. S. (2018). Post-conflict Policies in Colombia. An approach of the potentiality of South-South Cooperation (SSC) in the peace process. *Reflexión Política*, 20 (39), 7-23.

González, A. (2010). Justicia transicional y reparación a las víctimas en Colombia. *Revista mexicana de sociología*, 72 (4), pp. 629-658.

Ibáñez Najar, J. E. (2017). Justicia transicional y las comisiones de la verdad. Prólogo de Joaquín González Ibáñez. Instituto Berg. Colombia.

López, J. I. A., & Rubio, D. B. (2008). El cumplimiento de los fines de reparación integral de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: énfasis en la experiencia colombiana. *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, 6 (13).

Loianno, A. (2007). Evolución de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones. *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional*, (8), pp. 389-413.

Mejía, J. M. P. (2013). Reglas de prueba en el incidente de reparación integral. *Academia & Derecho*, (7), pp. 29-39.

Mejía, J. C. & Marín, A. L. (2015). Miembros de las Fuerzas Armadas como Víctimas. Enfoques desde la Justicia Transicional en Colombia. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez.

Meza, R. V. (2004). Drogas, conflicto armado y seguridad global en Colombia. *Nueva sociedad*, 192, pp. 117-131.

Molano-Rojas, A. (2015). El Posconflicto En Colombia: Reflexiones Y Propuestas Para Recorrer La Transición. Ediciones Ántropos Ltda. En: Gehring, H. (2015). Presentación De La Kas, pp. 11-13.

Monroy, J. C. (2013). Firmar un acuerdo de paz es solo el comienzo para el fin del conflicto armado: periodistas. *El colombiano*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/historico/firmar_un_acuerdo_de_paz_es_solo_un_paso_para_el_fin_del_conflicto_armado_periodistas-DAEC_272166

Montilla, P., González, L. E. & Bermejo, J. (2018). Espacios sociales para la generación de escenarios de paz: análisis de los procesos de paz desde la configuración de la ciencia política y la acción. *Amauta*, 16 (31), pp. 31-46.

Ospina, F. A. R. (2016). Reflexiones sobre el posconflicto: Aprendizaje de la historia. *Revista Ensayos Pedagógicos*, 11(1), pp. 41-55.

Ramírez, P. (2009). Ciudadanías negadas. Victimización histórica, reparación y (re) integración para mujeres y niñas en Colombia. El desafío de zurcir las telas rotas. *Reflexión Política*, 11 (21).

Restrepo, H. E. (1996). Vigilancia epidemiológica de homicidios y suicidios. *Fuentes*, 92, p. 736.

Rettberg, A. (2005). Entre el perdón y el paredón. Preguntas y dilemas de la justicia transicional. Bogotá: Ediciones Uniandes-Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Ciencia Política-Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO), Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC).

Roberto, V., Alexandra, M., & González Carrillo, L. C. (2011). La reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia desde la perspectiva de la ley de justicia y paz.

Rueda, M. H. (2008). Nación y narración de la violencia en Colombia (de la historia a la sociología). *Revista iberoamericana*, 74 (223), pp. 345-359.

Sierra-Zamora, P. A. (2018). La tutela de los Derechos Humanos en situaciones de postguerra: el caso colombiano. Working Paper. No. 2, pp. 3-9.

Sierra-Zamora, P. A. & Cubides-Cárdenas, J. A. (2018). Derechos Humanos en Colombia: A raíz del conflicto armado con las FARC. Bogotá. *Revista Científica "General José María Córdova"*. No. 2.

Sierra-Zamora, P. A. (2018). La tutela de los Derechos Humanos en situaciones de postguerra: el caso colombiano. Working Paper. No. 2, pp. 3-9.

Sierra-Zamora, P. A., Cubides-Cárdenas, J., & Carrasco Soulé, H. (2016). El control de convencionalidad: aspectos generales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el derecho colombiano. Cubides-Cárdenas, J., Cárdenas-Contreras, LE, Carrasco Soulé,

H., Castro Buitrago, CE, Chacón Triana, NM, Martínez Lazcano, AJ, Pinilla Malagón, JE, Reyes García, DI, Sánchez Baquero, MN & Sierra-Zamora, PA (2016). El control de convencionalidad: fundamentación e implementación desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

Teitel, R. (2003). Transitional justice genealogy. *Harv. Hum. Rts. J.*, 16.

Valencia, I. R. (2007). El estado actual de las víctimas en Colombia: la búsqueda de la verdad. *Revista colombiana de psiquiatría*, 36 (1), p. 41.

Valencia, O. L., & Daza, M. F. (2010). Vinculación a grupos armados: un resultado del conflicto armado en Colombia. *Diversitas: Perspectivas en psicología*, 6 (2), pp. 429-439.

Villán Durán, C. (1985). La convención contra la tortura y su contribución a la definición del Derecho a la integridad física y moral en el Derecho internacional. *REDI*, 37, p. 377.

Zapatero, L. A. (2013). La prohibición de las penas crueles e inhumanas y la abolición universal de la pena de muerte. *Revista de Occidente*, (385), pp. 5-26.

Zambrano, L., & Isa, F. G. (2013). Participation of civil society in the Colombian peace process. *NOREF: Norwegian Peacebuilding Resource Centre*.

Instrumentos Jurisprudenciales

Colombia, Constitución política. (1991). 2da Ed. Legis.

Colombia, Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y La Construcción De Una Paz Estable Y Duradera. (2016). Recuperado de: <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf>

Colombia, Ministerio de Defensa. ¿Qué es el derecho internacional humanitario?. Recuperado de: <https://www.armada.mil.co/es/content/%C2%BFqu%C3%A9-es-el-derecho-internacional-humanitario>

Jurisprudencia

Colombia, Corte Consttucinoal (2006). Sentencia C – 370.

Colombia, Corte Consttucinoal (2015). Sentencia C – 694.

Colombia, Corte Constitucional (2017). Sentencia C – 470.